

LA POSREVOLUCIÓN MEXICANA: CARACTERIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FORMAS DE CONTROL POLÍTICO AUTORITARIO

EL PUNTO DE PARTIDA

La historiografía política tradicional coloca el inicio del periodo posrevolucionario mexicano justo al concluir el momento estelar de la transformación social e institucional que se inició a partir del comienzo, en 1910, de una rebelión política que se transformó en revolución. Ese momento cumbre corresponde al sexenio del presidente Lázaro Cárdenas y la cima del cardenismo, cuyo inicio del ocaso se puede situar en 1938, cuando la reforma agraria —el reparto de millones de hectáreas que quebró la espina dorsal del latifundismo del viejo régimen—, la reorganización del partido oficial en una gran estructura corporativa —el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con sus sectores militar, obrero, campesino y popular— y la expropiación y nacionalización de las empresas petroleras extranjeras consumieron las energías de la gran y única explosión efectivamente populista del siglo xx mexicano.¹ Si el inicio de la posrevolución está más o menos claro, su final ya no. Una posibilidad es cerrar el periodo a mediados de la década de los ochenta, cuando el liderazgo político admitió que ya era irrecuperable el modelo económico

que sustentaba lo que se llamó el nacionalismo revolucionario e inauguró el capítulo del neoliberalismo y la privatización. También es posible elegir como el punto de inflexión julio del año 2000, cuando el heredero del PRM, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras disfrutar de un largo monopolio de la dirección del país, se vio obligado a admitir su derrota en las urnas en favor de la oposición de derecha encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN). Como sea, el problema de las fechas no afecta mayormente al análisis y aquí la posrevolución se cierra al cambiar el siglo, en el año 2000.

LA NATURALEZA DEL PERIODO

En términos políticos, la posrevolución no significa de ninguna manera un cambio de régimen, sino simplemente una etapa diferente: la consolidación del autoritarismo del régimen revolucionario.² Y este autoritarismo, a su vez, es una modalidad diferente —una etapa superior, por así decirlo— del autoritarismo establecido durante la larga serie de presidencias de Porfirio Díaz. El porfiriato fue una dictadura personal autoritaria en tanto que el surgido de la Revolución se transformó en un autoritarismo institucionalizado.

El régimen que sustituyó al porfirista fue extraordinariamente flexible gracias a que nunca llegó a tener una ideología realmente estructurada. Durante el cardenismo, el régimen se inclinó hacia la izquierda, lo que le permitió construir las grandes organizaciones de masas que le servirían de base social en el futuro, en particular la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina, así como una

Presidencia ya libre de las influencias de Plutarco Elías Calles, que, desde diciembre de 1929 hasta mediados de 1935, la había controlado desde las sombras en su calidad de Jefe Máximo de la Revolución mexicana.

La parte más violenta de la guerra civil, que estalló a finales de 1910, concluyó en 1916. Entonces, con la formulación de una nueva Constitución, que entró en vigor en 1917, se inició realmente el nuevo régimen. Si se considera que este marco político llegó a su fin justo en el año 2000, resulta que sumados los periodos de la Revolución y la posrevolución, es decir, la construcción, la consolidación y el desarrollo del autoritarismo institucional mexicano, éste resultó ser el más longevo y exitoso de su género en el siglo xx.

La estabilidad política autoritaria mexicana se puede medir con diferentes indicadores. El más evidente y llamativo es el de la continuidad. Fue al inicio de los veinte, en mayo, cuando un movimiento armado puso por última vez fin a una presidencia. A partir de esa fecha no faltaron los intentos de resolver por la vía de levantamientos militares o de rebeliones los conflictos políticos en México, pero ya ninguno de esos intentos tuvo éxito. Los cambios de gobierno se llevaron a cabo de acuerdo con el calendario y cuando excepcionalmente no fue ése el caso —por un atentado exitoso contra un presidente electo (1928) o por la renuncia del presidente (1932)—, la institucionalidad no se vio afectada sino reforzada. De esta manera, el grupo que formalmente asumió el poder bajo el liderazgo de Venustiano Carranza en 1917 pudo transmitirlo con éxito a uno de los suyos a lo largo de los siguientes 83 años. Se trató de una hazaña política única en América Latina y con muy pocos paralelos, si es que alguno, en el resto del mundo durante ese periodo.

La continuidad institucional y, sobre todo, la de las importantes reglas no escritas pero observadas por el grueso de los actores políticos —cómo entrar y cómo salir del círculo del poder, así como la forma de conducirse mientras se permaneciera dentro— casi no variaron a lo largo de ese largo periodo. En términos generales, el sistema se basó en una presidencia con pocos límites, pero sin posibilidad alguna de reelección. Se trató de una presidencia basada en un partido de Estado que, a su vez, quedó firmemente asentado en organizaciones de masas rígidamente controladas y subordinadas al presidente. En este esquema, la oposición sólo podía funcionar en la medida en que fuera leal al sistema, marginal dentro de éste y sin posibilidad de promover movilizaciones políticas o sociales. Ahora bien, lo que sí cambió a lo largo del tiempo fue la orientación del gasto público³ y, sobre todo, la asignación entre grupos, clases y regiones de las cargas y de los beneficios del ejercicio de la autoridad. Como ya se apuntó, cuando la presidencia abandonó la orientación hacia la izquierda en los cuarenta, se inició la posrevolución.

POSREVOLUCIÓN Y CAMBIO

Para mejor comprender la dinámica del cambio político a partir del fin del cardenismo, es útil elaborar una periodización dentro del gran arco temporal de seis décadas que abarca esta etapa. El enfoque tradicional ha consistido en explicar esto como una consecuencia inevitable del periodo presidencial sexenal: a cada inicio de sexenio corresponde un cambio en el personal político, en los estilos de gobernar y en el contenido de las políticas social, económica, cultural, exterior, etc. Seguir el ritmo sexenal era un

ejercicio útil, pero aquí la propuesta es enfocar la manera como cada uno de esos momentos de recambio dentro de la elite política implicó una lucha interna, un mecanismo de control y una forma distinta de enfrentar a la oposición externa. Esta oposición, que en el inicio fue poco significativa, con el correr del tiempo y pese a los mecanismos de represión fue adquiriendo arraigo en una sociedad que evolucionaba —cada vez más urbana, más educada, más comunicada e informada— hasta poder enfrentar con éxito al PRI y poner fin al régimen.

La primera etapa. Centrando el análisis en la institución política fundamental del régimen —la presidencia— y en la forma como enfrentó la lucha por el poder y mantuvo el control del partido de Estado, la primera etapa puede comprender los años que corren de 1940 a 1952, es decir, los periodos presidenciales de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán.

La sucesión de Lázaro Cárdenas se inició como una lucha interna dentro del partido de Estado, el PRM. Simplificando, la elite política se dividió en dos corrientes, cada una con una base social distinta y significativa. Por un lado estaba el grupo que deseaba arraigar e incluso profundizar la marcha hacia la izquierda y que encabezaba el general Francisco J. Múgica, que tenía apoyo entre las organizaciones campesinas y sindicales. Por otro, estaba la corriente de derecha que deseaba frenar e incluso revertir las políticas del cardenista, encabezada por el también general Juan Andrew Almazán, al que respaldaba una parte del ejército, los remanentes del callismo, la clase media y los empresarios, sobre todo los del norte.⁴

El choque de 1940 puso en tensión máxima al sistema. Para poder manejar la sucesión, el presidente Cárdenas debió pagar un costo muy alto: desistir de apoyar a su amigo y correligio-

nario, el general Múgica, y optar por imponer como candidato oficial a otro general, a uno que ya no aseguraría la continuidad de la política reformista, pero no atemorizaría a centristas y conservadores, mantendría la lealtad del ejército y, finalmente, garantizaría la continuidad del aparato político y sus reglas: Manuel Ávila Camacho. Al final, Ávila Camacho pudo asumir el poder aunque dejó tras de sí unas elecciones manchadas por el fraude y la violencia.

La crisis sucesoria del cardenismo dejó en claro, entre otras cosas, que la única oposición sustantiva sólo podía anidar y desarrollarse dentro de la propia elite política. En segundo lugar, que cuando los descontentos abandonaban al partido de Estado para construir una alternativa, su lucha era cuesta arriba, pues el autoritarismo simplemente no podía aceptar el desarrollo de un juego real de partidos y al final del trayecto todo el peso del Estado caía sobre los disidentes: el fraude y la represión, para luego recoger a algunos de los derrotados mediante la cooptación. El tercer punto fue dar una lección práctica a todos los miembros del partido del Estado: redituaba más disciplinarse a la voluntad presidencial que retarla.

Para los triunfadores, la sucesión también dejó lecciones que servirían al proceso de aprendizaje del autoritarismo posrevolucionario. Una de estas lecciones fue que para neutralizar a la derecha radical dentro de la elite gobernante fue necesario recurrir a la derecha disciplinada, a la que entendía las reglas del juego, en una palabra, combatir el fuego con el fuego. Pero tal estrategia tenía un precio, y grande: la presidencia saliente tenía que estar dispuesta a sacrificar su propio proyecto —en 1940, el continuar con las reformas sociales— para poder contar con la obediencia del aparato en su conjunto.

El resultado final de la crisis de 1940 fue que el autoritarismo no sólo sobrevivió a la coyuntura, sino que se fortaleció; pero el proyecto de nación que encarnó el cardenismo no fue, como entonces se quiso suponer, un paso atrás para luego dar dos hacia delante, sino un cambio de rumbo definitivo. La izquierda del partido oficial ya no volvería a tener la posibilidad de conducir al entramado institucional autoritario que había contribuido a consolidar.

La sucesión de Cárdenas dejó en claro que las organizaciones de masas no tenían la capacidad de defender sus propios intereses, que la disciplina del ejército había avanzado notablemente, pues apenas once años antes —en 1929— una parte significativa de las fuerzas armadas se había decidido a buscar en el campo de batalla la ganancia que no había tenido en la negociación interna. En 1940 sí hubo acciones de rebeldía dentro del ejército, pero al no contar con la decisión del general Almazán de encabezarlas, simplemente fueron aplastadas.

Finalmente, aunque no determinante, el factor externo también contó. La coyuntura de la Segunda Guerra Mundial hizo que el gobierno estadounidense no respaldara a una derecha mexicana que buscó su apoyo, pero que no lo consiguió porque ya mostraba simpatías por el fascismo. Para Washington, resultó más seguro respaldar a un Cárdenas que en la arena internacional estaba “en el lado correcto”.⁵

En la siguiente elección, la de 1946, volvió a producirse una división dentro del círculo gobernante. El exitoso y conservador secretario de Relaciones Exteriores de los años de la Segunda Guerra, el abogado Ezequiel Padilla, se consideró el personaje con más méritos dentro del gabinete para suceder a Ávila Camacho. Padilla se negó a aceptar la decisión presidencial de

entregar el poder al secretario de Gobernación, también un abogado: Miguel Alemán Valdés. Padilla tenía los contactos con los personajes importantes del mundo exterior, políticos y empresarios, con las potencias vencedoras en la lucha contra el Eje. Sin embargo, Alemán tenía los hilos de la estructura interna de poder: los aparatos del partido del Estado, los gobernadores, los dirigentes de los sindicatos, los líderes de la burocracia, los directores de los periódicos, etc. El resultado fue que los factores internos se impusieron sobre los externos.

La pugna y desprendimiento interno encabezado por Padilla —que organizó su propio partido, el Partido Democrático Mexicano—, ya no significó para el sistema un reto y una crisis de la magnitud de seis años atrás. En primer lugar, porque el candidato oficial y el disidente eran simplemente dos representantes de una misma corriente política conservadora. En segundo lugar, el padillismo ya no involucró la posibilidad de una división en el ejército y, por tanto, de una rebelión militar. El control presidencial de todos los hilos de la política interna simplemente neutralizó al padillismo en las urnas y Miguel Alemán arribó sin mayores problemas a la presidencia. Es de notar que entre los hilos que se movieron entonces se encontraron los que ataban ya al antiguo grupo cardenista del partido oficial, que desde un año antes aceptó no luchar por la precandidatura de uno de los suyos —Javier Rojo Gómez o Miguel Henríquez Guzmán— y apoyó a Miguel Alemán.⁶

La siguiente sucesión, la de 1952, revivió todos los fantasmas de doce años atrás, cuando la lucha interna volvió a cuartear de arriba abajo al partido oficial, que entonces ya había dejado de ser el PRM del cardenismo para cambiar eslóganes y plataforma

hacia la derecha y transformarse en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El desafío a lo que en ese tiempo ya se consideraba como la principal prerrogativa presidencial —el nombramiento de su sucesor— provino del general Miguel Henríquez Guzmán, que si bien seis años atrás había declinado aparecer como precandidato, en 1952 decidió retar al presidente y no aceptó al personaje designado por Alemán para sucederle, que de nuevo era un civil y secretario de Gobernación: Adolfo Ruiz Cortines. Henríquez buscó entonces el apoyo de los remanentes del cardenismo (aunque Cárdenas mismo no se comprometió con el inquieto general) y, desde luego, de una parte de su propia institución: el ejército.

La campaña de 1952 fue tan intensa en su movilización o incluso más que la de dos sexenios atrás. De nuevo fue necesario que el presidente y su partido echaran mano de todos los recursos del Estado, incluida la fuerza, para neutralizar al henriquismo, que era una mezcla de esas partes de la izquierda y derecha descontentas con la forma como el grupo de Alemán había manejado el poder. Desde luego que menudearon las acusaciones de corrupción contra el presidente y su candidato y de muchas formas los descontentos subrayaron que la política gubernamental se había alejado de sus orígenes revolucionarios. Sin embargo, el control del gobierno y su partido sobre las organizaciones de masas y sobre el ejército permitieron que unas elecciones de resultados predeterminados le dieran la victoria al nada carismático Ruiz Cortines. Las protestas poselectorales fueron reprimidas con gran violencia y el partido de Henríquez —Federación de Partidos del Pueblo— no tardó en ser declarado ilegal y en desaparecer de manera efectiva.⁷

Como en el caso de Almazán, un buen número de henriquistas sufrieron los duros efectos de la intolerancia del régimen a los opositores que efectivamente movilizaban a segmentos importantes de la sociedad, pero no el general Henríquez. En efecto, al líder opositor de 1952, como a los de 1946 y 1940, le fue permitido continuar con sus negocios particulares y compensar con beneficios económicos sus pérdidas políticas.

Como conclusión, en el periodo examinado el principal problema político al que se enfrentó el sistema autoritario de la posrevolución fue el de las pugnas internas. El mayor desafío al presidencialismo provino de las entrañas de la elite política. La oposición externa, como el Partido Acción Nacional (PAN), formado en 1939 para dar voz a una derecha democrática y de clase media, o el sinarquismo, una derecha de extracción más popular, no llegó en ningún momento a poner en peligro el dominio de los herederos de la Revolución mexicana.⁸ Tampoco la izquierda externa al partido de Estado —el Partido Comunista— fue capaz de desafiar al régimen.⁹ El triunfo del presidencialismo sobre los descontentos internos hizo que tras cada victoria adquiriera mayor fuerza, al punto que tras el fracaso del henriquismo, la disciplina interna fue uno de los rasgos más notables del sistema.

EL PERIODO CLÁSICO

La etapa de un control autoritario efectivo de la presidencia mexicana sobre los grandes procesos políticos corresponde a los sexenios de Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz, por lo menos hasta 1968.

En este periodo de poco más de tres lustros, el presidencialismo pudo negociar o imponerse por la vía de la represión o la cooptación sobre todos los actores importantes del proceso político mexicano. De todas maneras, la independencia con que entonces llegó a actuar el ex gobernador de Tabasco y ex presidente del PRI, Carlos Madrazo, llegó a preocupar al presidente Gustavo Díaz Ordaz. La muerte de Madrazo en un accidente cortó de raíz esta fuente de agitación dentro de las filas priístas y la posibilidad de una nueva escisión en el grupo gobernante.¹⁰

Aunque de tarde en tarde la derecha hizo manifestaciones de protesta —por ejemplo, su oposición a los libros de texto en el sistema de educación primaria—¹¹ la resistencia al presidencialismo autoritario en el periodo fue fundamentalmente un esfuerzo de la izquierda. Sin embargo, en San Luis Potosí se dio un movimiento de oposición al caciquismo de Gonzalo N. Santos, encabezado por el doctor Salvador Nava, quien no pidió permiso a la presidencia para actuar y movilizó a diferentes corrientes y clases sociales bajo un paraguas de protesta liberal y democrática. El navismo potosino tuvo tal éxito que debió ser reprimido con violencia por el gobierno federal para evitar que arraigara y se extendiera hacia otras zonas.¹² La represión en San Luis Potosí tuvo un éxito relativo porque, si bien contuvo a esa oposición democrática, no la eliminó y volvería a surgir.

Los movimientos sindicales de corte independiente, como los desarrollados por maestros, ferrocarrileros o médicos en las instituciones públicas de salud, también fueron percibidos como peligrosos por el régimen y finalmente sometidos con una dosis más o menos fuerte de represión.¹³ La oposición política armada en el periodo fue marginal y nunca puso en peligro la estabilidad del régimen, pero existió y fue neutralizada por la

vía de la represión extrema; ése fue el caso de Rubén Jaramillo en Morelos o de la guerrilla de Chihuahua o Guerrero.¹⁴

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 muy pronto se convirtió, en México como en el resto de América latina, en un factor que alentó el descontento de grupos similares a los que en la isla antillana habían dado forma a una guerrilla exitosa. Sin embargo, las manifestaciones públicas de la izquierda en apoyo a Cuba y al castrismo fueron controladas. El Movimiento de Liberación Nacional, aunque contó con las simpatías del ex presidente Lázaro Cárdenas, fue estrechamente vigilado en los servicios de seguridad del Estado, aislado y asfixiado por un ambiente ferozmente anticomunista fomentado desde el poder y sostenido por una campaña sistemática en los medios de comunicación.¹⁵

En esos años de 1950 y 1960, la fuente de legitimidad del sistema autoritario mexicano no provenía, obviamente, de las fuentes formales —los procesos electorales—, sino de una combinación de éxito económico —crecimiento anual promedio del producto interno bruto de 6 por ciento—, con los remanentes del nacionalismo revolucionario más la preservación de una independencia relativa frente al gobierno de Washington —la política hacia Cuba, por ejemplo, no aceptó las directivas que Estados Unidos impuso al resto de América latina— y una ausencia de opciones políticas reales.¹⁶

El sorpresivo movimiento de protesta estudiantil que estalló en la ciudad de México en julio de 1968 —en vísperas de la celebración de los juegos olímpicos—, su rápido desarrollo y su brutal represión el 2 de octubre, primero, y el 10 de junio de 1971, después, marcaron el final del periodo clásico del autoritarismo mexicano.¹⁷ Las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de

Corpus deslegitimaron al sistema frente a sectores clave de las clases medias y, finalmente, sirvieron para mostrar los extremos antidemocráticos y los límites de la tolerancia a los cuestionamientos del sistema autoritario mexicano. El asesinato masivo de estudiantes por el ejército en la ciudad de México en 1968 y por un cuerpo paramilitar en 1971 fue la demostración dramática de la imposibilidad del sistema posrevolucionario para mantenerse como una astuta combinación de manipulación, propaganda y cooptación con un mínimo de violencia. Tras la represión contra la parte más educada de la clase media, resultó evidente que se requería de cambios profundos en las reglas vigentes para hacer frente, sin nuevo derramamiento de sangre, a las demandas de democratización de una sociedad que había cambiado mucho respecto a lo que era en los orígenes del sistema autoritario. Había perdido su carácter rural y ahora era más educada e informada que en el pasado. Fue entonces que se inició el lento pero inexorable declinar del sistema posrevolucionario. Ni siquiera el férreo control del régimen sobre el sistema electoral impidió que las urnas terminaran por mostrar una pausada pero sistemática decadencia del apoyo al partido de Estado.¹⁸ La mejor respuesta, entonces, de las autoridades a las demandas de cambio y apertura fue una serie de reformas electorales que también se denominaron reforma política. Se trató de una manera más de cooptación, pues se abrió la Cámara de Diputados a una mayor presencia de los partidos minoritarios de izquierda y derecha para que sus líderes tuvieran representación en el Poder Legislativo, poder al que, por otra parte, se mantuvo impotente mediante la preservación de la mayoría absoluta del partido oficial, es decir, de los instrumentos del presidente.¹⁹

EL PERIODO POSCLÁSICO DE LA POSREVOLUCIÓN

El inicio de este periodo corresponde al final del gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz y abarca los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo, además más el inicio del dirigido por Miguel de la Madrid, es decir, de 1968 a mediados de los ochenta.

Echeverría —uno de los responsables de la represión del movimiento estudiantil— decidió responder a la crisis de 1968-1971 con una retórica y una política de gasto público populista y de mayor control sobre los sectores corporativizados del partido oficial. Sin embargo, entonces el modelo económico mexicano de industrialización y sustitución de importaciones ya estaba dando señales de agotamiento. El déficit constante en la balanza de pagos y un gasto público excesivo sin la contraparte de una reforma fiscal reintrodujo el fenómeno de la inflación y, en 1976, una devaluación espectacular. Al final del echeverrismo, a la crítica y enajenación de los sectores de clase media ilustrada se le habían unido, desde la derecha, el descontento de ciertos grupos del sector empresarial, en particular del Grupo Monterrey, que criticaba tanto la política económica —la pretensión de dirigir la economía desde Los Pinos— como el lenguaje pseudoprogresista del presidente.²⁰

Los militantes más radicales de la izquierda reprimida en Tlatelolco y durante el Jueves de Corpus decidieron que la única salida para lograr el cambio político era la lucha armada. Esta acción de jóvenes urbanos coincidió con un movimiento guerrillero en Guerrero, encabezado por maestros rurales quienes, de esa manera, habían decidido enfrentar al poder caciquil de su estado. Esto resultó en la Guerra Sucia de los setenta, cuando el

aparato de represión del Estado —ejército, Dirección Federal de Seguridad y policías locales— no reconoció límite alguno para acabar con la resistencia. Las heridas abiertas entonces por este tipo de acción y represión no están cerradas enteramente.²¹ La acción de la guerrilla hizo que la derecha empresarial se impacientara y su crítica al gobierno se agudizó por el demagógico discurso presidencial, por el intento de reforma fiscal y, finalmente, por el asesinato, en un intento de secuestro, de la cabeza del Grupo Monterrey —Emilio Garza Sada— y la crisis económica de 1976.²²

El sucesor de Echeverría, el ex secretario de Hacienda, López Portillo, tuvo una elección de Estado tan “exitosa” que resultó contraproducente, pues al negarse el PAN —la oposición leal— a participar una vez más en unas elecciones sin contenido, hizo que la victoria del candidato del PRI tuviera un aire soviético al ganar con 100 por ciento de los votos válidos emitidos. La respuesta del gobierno a una victoria tan dudosa, por exagerada, fue usar los grandes depósitos petroleros recién descubiertos en el sureste y una nueva reforma electoral para intentar relanzar el viejo modelo económico y regenerar la legitimidad del “nacionalismo revolucionario”, es decir, del autoritarismo. Sin embargo, el empeño del lopezportillismo falló por una combinación de ineptitud y corrupción, más una baja tan pronunciada como inesperada del precio mundial del petróleo, lo que dejó a México con una moneda devaluada, una enorme deuda externa —más de ochenta mil millones de dólares—, la necesidad de pedir ayuda a Estados Unidos para evitar una moratoria y, finalmente, una pesada sombra de duda sobre el futuro.²³

La crisis de 1982 fue el inicio del fin de un modelo de economía protegida que ya no podía sobrevivir como tal en el

mundo de la globalización y la privatización. En medio de una crisis económica sin paralelo desde los tiempos de la guerra civil revolucionaria, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió dar a México una amarga y supuestamente poderosa medicina. México reestructuró su deuda con el apoyo estadounidense, pero también derribó sus barreras proteccionistas, ingresó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio —se sometió a su disciplina—, empezó a privatizar las empresas del gobierno y a dar forma a acuerdos o “pactos” con sindicatos y empresarios para contener la inflación.²⁴

LA CRISIS FINAL DEL AUTORITARISMO POSREVOLUCIONARIO O LA LARGA TRANSICIÓN

La “legitimidad pragmática” del presidencialismo (dar algo a todos, aunque menos a los más y más a los menos) entró en crisis a mediados de los ochenta como resultado directo del impacto de la economía mundial. La respuesta que se intentó por parte de la alta clase política fue reintroducir el dinamismo al aparato productivo mexicano mediante un tratamiento de *shock*. Se emplearon a fondo los grandes poderes presidenciales para rehacer el modelo económico y, a la vez, contener el daño político en tanto que la supuesta magia del mercado global empezaba a restituir a las clases populares y medias lo perdido. Al menos eso era lo que se esperaba de la combinación de apertura, privatización y disciplina fiscal, puntos centrales del llamado Consenso de Washington.²⁵

Este último periodo abarca del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) al de Ernesto Zedillo (1994-2000), pero su verdadera clave está en el intermedio, el presidido por Carlos

Salinas (1988-1994). El proceso de desmontar la "economía presidencial" movió todos los equilibrios de los grandes actores político-sociales y volvió a generar una división interna dentro del partido de Estado, que coincidió con la incorporación de un grupo de empresarios medianos al PAN y el surgimiento del "neopanismo", es decir, del llamado de lo que era entonces la derecha democrática a tomar el poder por la vía de las urnas.

Desde la perspectiva del control político tradicional, fue entonces cuando, como producto de una baja en la legitimidad del régimen, se forzó la entrada a la arena electoral de actores políticos no autorizados por la presidencia y sin que ésta pudiera ya expulsarlos, como había ocurrido en el pasado. Estos actores no controlados fueron, primero, el ya mencionado neopanismo, desde la derecha, y luego el neocardenismo, desde la izquierda, con la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), que surgió como un desprendimiento del PRI. El resultado inmediato fueron elecciones competidas pero con resultados no creíbles, justamente como había ocurrido en 1940, 1946 y 1952. Sin embargo, esas elecciones sin credibilidad, como la de 1986 en Chihuahua y, sobre todo, la nacional de 1988, ya no concluyeron como en el pasado, en una represión/desmovilización de los oponentes, sino en algo que iba directamente en contra de la esencia del autoritarismo: en la consolidación e institucionalización de una oposición independiente.

Las elecciones de 1988 las ganó oficialmente el candidato del gobierno, Salinas de Gortari, pero el retraso en la entrega de los resultados como producto de una supuesta "caída del sistema de computo" deslegitimó definitivamente al proceso. Se hizo evidente entonces que únicamente mediante la manipulación del cómputo, mediante el fraude, se pudo evitar la derrota del

PRI.²⁶ Salinas intentó ganar su legitimidad desde la Presidencia mediante golpes espectaculares contra sus enemigos internos —el encarcelamiento del poderoso líder sindical petrolero Joaquín Hernández Galicia— y con la creación de una política social enmarcada en el Programa Nacional de Solidaridad que si no atacaba las causas de la pobreza, sí paliaba sus efectos.²⁷ Para resolver el problema de la poca efectividad del aparato productivo, Salinas se mostró audaz: abandonó el llamado “nacionalismo revolucionario” y, en cambio, negoció su antítesis: un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que se firmó en 1993. La idea era tener un acceso privilegiado para las manufacturas mexicanas en el mercado de Estados Unidos y, como consecuencia, conseguir un gran flujo de inversión extranjera interesada en crear plantas en México por la combinación de mano de obra barata y demanda estadounidense.

Desde la consolidación del régimen revolucionario, la oposición real, la que le disputaba el poder a la elite posrevolucionaria, no se había podido sostener por mucho tiempo después de su derrota. Sin embargo, el neopanismo y el neocardenismo logran resistir y consolidarse, con lo cual derribaron uno de los pilares del modelo autoritario. El neopanismo se mantuvo negociando sus coincidencias económicas con el presidencialismo y a cambio obtuvo el reconocimiento, no sin dificultades, de sus primeras victorias en los gobiernos estatales: Baja California, Querétaro y Guanajuato. El neocardenismo —la izquierda— no pactó y sufrió represión y fraudes locales, pero logró mantener a una parte importante de sus simpatizantes originales. La caída de la URSS en 1989 y el debilitamiento del anticomunismo mundial, hicieron menos legítimas las acciones del poder en contra del nuevo partido surgido de la crisis electoral de 1988: el Partido

de la Revolución Democrática (PRD), conjunción de los disidentes de izquierda del PRI con los remanentes de otras izquierdas, desde comunistas hasta socialdemócratas.²⁸

El salinismo, cuyo núcleo fuerte dentro de la administración pública era un grupo tecnocrático del cual casi habían desaparecido los viejos políticos tradicionales, mantuvo el control de lo que quedaba del PRI, recibió un gran respaldo estadounidense, de los grupos empresariales que habían sobrevivido a la apertura económica, de los medios de comunicación y de la Iglesia católica, a la que cortejó con reformas constitucionales en su favor. El efecto de ese apoyo fue una victoria holgada en las elecciones intermedias de 1991. Sin embargo, justo cuando preparaba su sucesión, el contexto se complicó. 1994 resultó ser un *annus horribilis* para el régimen. En ese año, el conflicto interno dentro del círculo del poder desembocó en el asesinato, en mayo, del candidato del PRI a la presidencia: Luis Donald Colosio, que tuvo que ser sustituido por Ernesto Zedillo. No obstante, antes, el 1 de enero, ya había sucedido otro hecho igualmente perturbador: en un país cuyo presidente había anunciado que estaba a punto de ingresar al exclusivo grupo de países del Primer Mundo, reapareció la resistencia armada, y no sólo eso, sino que era una resistencia de indígenas que protestaban así a una injusticia institucionalizada que los mantenía en la pobreza y la marginación.²⁹ De esta forma, mientras Salinas, como el resto del país, celebraba el Año Nuevo, en Chiapas entró en acción el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que atacó el cuartel de Rancho Nuevo y tomó por unas horas la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. La lucha armada duró muy poco, pues una parte de la sociedad exigió detenerla y responder positivamente a una demanda tan histórica como legítima. Sin embargo, los efectos

políticos del neozapatismo fueron considerables. Lo que quedó entonces en claro fue que a México le faltaba mucho para ser realmente un país moderno y que su democracia era sólo un disfraz. El gobierno se vio forzado entonces a llevar adelante una reforma electoral que, por primera vez, sentó las bases para un sistema de elecciones genuinas —equitativas y con resultados creíbles—, al menos a nivel federal. Asimismo, las elecciones de julio de ese año aún estuvieron muy lejos de ser equitativas aunque ya no sufrieron del fraude masivo de seis años atrás. De todas formas, el candidato del partido del Estado —Zedillo— apenas si consiguió el apoyo de un poco más de 50 por ciento del electorado.³⁰

La necesidad de tener un ambiente propicio para las elecciones llevó a crear una economía de ficción; una que diera la apariencia de solidez y crecimiento, pero que en realidad estaba montada en un ingreso masivo de capital especulativo del exterior, atraído por altas tasas de interés. Al cambiar el equipo de gobierno como resultado de la renovación presidencial, la burbuja especulativa estalló, sobrevino una gran devaluación a la que después seguiría la quiebra y rescate del sistema bancario y una caída del producto interno bruto de alrededor de 7 por ciento. La legitimidad que la tecnocracia pensaba restaurar vía un nuevo modelo económico simplemente se evaporó.

Sin legitimidad económica y con muy poca legitimidad política, la presidencia de Zedillo se convirtió en una lucha del régimen contra el tiempo. Y ese tiempo se le agotó. El poder presidencial ya no pudo controlar ni a su propio círculo de poder —el gobernador de Tabasco, Carlos Madrazo, acusado de un fraude electoral evidente, se negó a aceptar la sugerencia de Zedillo para trocar su lugar en la Quinta Grijalva por un puesto

en el gabinete— y en las elecciones intermedias de 1997 el PRI no pudo evitar perder por primera vez en su historia el control de la Cámara de Diputados y el gobierno de la ciudad de México. Ahí y entonces se vinieron abajo elementos insustituibles para el mantenimiento del autoritarismo posrevolucionario mexicano; su fin era ya cuestión de tiempo, de poco tiempo. Y ese tiempo fue la elección presidencial de 2000, cuando el viejo partido de Estado, tras 71 años consecutivos de controlar la presidencia —la principal institución política de México— debió cederla pacíficamente al principal partido de derecha, al PAN. La posrevolución había llegado a su fin y un nuevo capítulo en el desarrollo político de México empezaba a escribirse.

NOTAS

¹ El análisis político de este momento histórico se encuentra en Arnaldo Córdova, 1974, *La política de masas del cardenismo*, México, Era, y en Adolfo Gilly, 2001, *El cardenismo, una utopía mexicana*, México, Era.

² Para una definición y exploración del concepto de autoritarismo, puede verse a Juan J. Linz, "An Authoritarian Regime: The Case of Spain" en Eric Allardt y Yrjö Littunen (eds.), *Cleaveges, Ideologies and Party Systems*, Helsinki, Fld., Transactions of the Westermarck Society, 1964, pp. 291-342.

³ Un muy buen análisis de cómo se constituyeron y se modificaron a lo largo del siglo xx los gastos de los recursos públicos en las áreas social, económica y administrativa, se encuentra en James Wilkie, 1978, *La Revolución Mexicana, 1910-1976: gasto federal y cambio social*, México, Fondo de Cultura Económica.

⁴ Albert Louis Michaels, 1971, *The Mexican election of 1940*, Buffalo, N. Y.: Council on International Studies, State University of New York at Buffalo; Bernardino Mena Brito, 1941, *El PRUN, Almazán y el desastre final*, México, Botas; Héctor Ceballos Garibay, 2002, *Francisco J. Múgica: crónica política de un rebelde*, México, Coyoacán.

⁵ El embajador estadounidense en México siempre sostuvo que era absurdo intentar desestabilizar a México en un momento internacional tan delicado. Al respecto véase el libro del propio embajador Josephus Daniels, *Diplomático en mangas de camisa*, México, s. f.

⁶ León García Soler, 1982, *Mito y método en la sucesión presidencial*, México, Grijalbo, pp. 133-135; José Agustín, 1990, *Tragicomedia mexicana 1*, México, Planeta, pp. 40, 60-62.

⁷ Un buen análisis del henriquismo como oposición surgida desde el interior del régimen, se puede encontrar en Elisa Servín, 2001, *Ruptura y oposición. El movimiento henriquista, 1945-1954*, México, Cal y Arena.

⁸ En torno al PAN, ver a Soledad Loaeza, 1999, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994: oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica.

⁹ Sobre el sinarquismo, consúltese a Jean Meyer, 1996, *El sinarquismo, el cardenismo y la Iglesia: 1937-1947*, México, Tusquets, 2003. Por lo que respecta al Partido Comunista, una historia se encuentra en Barry Carr, *La izquierda mexicana a través del siglo xx*, México, Era.

¹⁰ Rogelio Hernández Rodríguez, 1991, *La formación del político mexicano: el caso de Carlos A. Madrazo*, México, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, pp. 152-202.

¹¹ María Soledad Loaeza Tovar, 1999, *Clases medias y política en México: la querrela escolar, 1959-1963*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, pp. 245-338.

¹² Tomás Calvillo, 1986, *El navismo o los motivos de la dignidad*, San Luis Potosí, Talleres Litográficos.

¹³ José Luis Reyna, 1975, *De la inmovilidad a la acción: el movimiento obrero 1952-1959*, México, El Colegio de México.

¹⁴ Tanalis Padilla, "‘Por las buenas no se puede’. La experiencia electoral de los jaramillistas", pp. 275-306; Víctor Orozco Orozco, "La guerrilla chihuahuense de los años sesenta", pp. 337-360; Jorge Luis Sierra, "Fuerzas armadas y contrainsurgencia", pp. 361-404; todos en Marta Eugenia García Ugarte, Verónica Oikión Solano, (eds.), 2006, *Movimientos armados en México, siglo xx*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Renato Ravelo Lecuona, 1978, *Los jaramillistas*, México, Nuestro Tiempo, pp. 146- 167.

¹⁵ Olga Pellicer de Brody, "La revolución cubana en México", en *Foro Internacional*, vol. 8, núm. 4 [32], abril-junio, 1968, pp. 360-383.

¹⁶ El éxito del modelo económico de ese periodo está analizado en la obra de Clark W. Reynolds, 1973, *La economía mexicana: su estructura y crecimiento en el siglo xx*, México, Fondo de Cultura Económica. La naturaleza de la independencia relativa frente a Estados Unidos está explicada en Mario Ojeda, 1976, *Alcances y límites de la política exterior de México*, México, El Colegio de México.

¹⁷ Sobre Tlatelolco y sus secuelas existe una bibliografía considerable. Sin embargo, el trabajo clásico sigue siendo uno de los primeros, el de Elena Poniatowska, 1971, *La noche de Tlatelolco*, México, Era.

¹⁸ Juan Molinar Horcasitas, 1991, *El tiempo de la legitimidad*, México, Cal y Arena.

¹⁹ El análisis de las reformas electorales ha dado lugar a una amplia bibliografía, pero una buena visión general del proceso se encuentra en Luis Medina, 1996, *Hacia el nuevo Estado: México, 1920-1994*, México, Fondo de Cultura Económica.

²⁰ Gabriel Zaid, 1989, *La economía presidencial*, México, Vuelta.

²¹ La naturaleza de la lucha armada de esta época y su represión está analizada en Sergio Aguayo, 2001, *La charola: una historia de los servicios de inteligencia en México*, México, Grijalbo,

²² Juan Manuel, Martínez Nava, 1984, *Conflicto estado-empresarios en los gobiernos de Cárdenas, López Mateos y Echeverría*, México, Nueva Imagen, pp. 194-274.

²³ Nora Claudia Lustig, "Crisis económica y niveles de vida en México: 1982-1985", *Estudios económicos*, vol. 2 núm. 2 julio-diciembre, 1987, pp. 227-249; Wayne Armstrong Cornelius, "The Political Economy of Mexico under De la Madrid: Austerity, Routinized Crisis, and Nascent Recovery", *Mexican Studies*, vol. 1 núm. 1, invierno, 1985, pp. 83-124.

²⁴ Una síntesis del auge y decadencia del modelo económico posrevolucionario se encuentra en José Romero, "Crecimiento y comercio" y en Manuel Gollás, "Breve relato de cincuenta años de política económica", en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), 2003, *Una historia contemporánea de México*, t. 1, México, Océano, pp. 155-312.

²⁵ José Antonio Ocampo, 2005, *Más allá del Consenso de Washington: una agenda de desarrollo para América latina*, México, Naciones Unidas, CEPAL, pp. 7-8.

²⁶ Silvia Gómez Tagle, 1994, *De la alquimia al fraude en las elecciones mexicanas*, México, García y Valadés, pp. 59-138; Daniel Doyle, 1998, *Democracy In The Context Of Fraud: the Mexican Presidential Election of 1988*, San Diego, D. Doyle, pp. 373-394; Abraham Nuncio, 1988, *Las elecciones de 1988: crónica de un fraude anunciado*, México, Presencia Latinoamericana, pp. 39-45.

²⁷ Denise Dresser, 1991, "Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems: Mexico's National Solidarity Program", San Diego, Calif., Center for U.S.-Mexican Studies, University of California.

²⁸ Kathleen Bruhn, 1996, *Taking on Goliath: The Emergence of a New Cardenista Party and the Struggle for Democracy in Mexico*, University Park, Pa.: Pennsylvania State University, pp. 67-114.

²⁹ Luis Hernández Navarro, 1995, *Chiapas: la guerra y la paz*, México, ADN, pp. 24-34; Carlos Montemayor, *La guerrilla recurrente*, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1999; Carlos Tello Díaz, 1996, *La rebelión de las Cañadas: origen y ascenso del EZLN*, México, Cal y Arena.

³⁰ José Antonio Crespo Mendoza, 1995, *Comportamiento electoral: cultura política y racionalidad en los comicios de 1994*, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, p. 17.